

FUNDACION FELIPE HERRERA LANE

INFORME DE TENDENCIAS

Diciembre 2019

Una visión conspirativa del estallido social

Reconociendo que existen razones objetivas que contribuyen a explicar el estallido social registrado en el país, asociadas a las profundas desigualdades que marcan nuestro proceso de desarrollo, además de numerosos abusos de parte del mercado y malas prácticas políticas, el gobierno mantiene una visión conspirativa respecto de los numerosos actos de violencia que han acompañado las movilizaciones sociales, insistiendo en las versiones de acciones instigadas por potencias extranjeras (Rusia, Venezuela, etc.) que habrían montado una campaña de desinformación y noticias falsas con miras a desacreditar la acción del gobierno y los servicios policiales, incentivando actos de protesta y hechos de violencia, como la destrucción de estaciones del metro, saqueos de supermercados y destrucción de la propiedad pública y privada.

En verdad, hasta el momento, el gobierno no ha podido aportar antecedentes serios acerca de una supuesta intervención extranjera en los hechos de violencia que han acompañado las movilizaciones sociales. Las referencias a esta supuesta intervención foránea a las que se ha referido el Presidente en diversas entrevistas a medios internacionales están basadas en suposiciones, referencias y elucubraciones respecto de grupos organizados, con alta preparación y tecnología, que habrían actuado concertadamente que, hasta ahora, no han tenido acogida en medios judiciales.

El tema no es menor a la hora de tener un adecuado diagnóstico acerca de las causas que explican este estallido, los verdaderos protagonistas de las acciones de violencia y la forma de enfrentar ambos fenómenos.

Son los abusos y desigualdades, estúpidos

Efectivamente, resulta curioso que este fenómeno explote con la profundidad, masividad, y por momentos la violencia que lo ha acompañado en un país como Chile que, tal como lo afirma el propio mandatario, ha experimentado un gran salto al desarrollo desde 1990 a la fecha, quintuplicando su ingreso per cápita, reduciendo drásticamente la pobreza, acortando la brecha de las desigualdades, mejorando todos y cada uno de sus indicadores sociales, teniendo el mejor índice de desarrollo humano en la región.

Es más que evidente que no se puede leer la historia de estos últimos treinta años simplemente como una historia de abusos y desigualdades, sin contrastarla con los innegables éxitos y avances en materia social, económica y política.

Pero es igualmente evidente que aún tenemos un país extraordinariamente desigual, en donde los pobres son menos y menos pobres pero los ricos son aún más ricos. Aquellos sectores que han salido de la condición de pobreza gracias a activas políticas sociales y el desarrollo del país, integran las llamadas clases medias vulnerables, amenazadas por imprevistos o su propia vejez. Los jubilados y pensionados reciben pensiones miserables, la salud y educación pública es aún muy deficiente y más de 600.000 jóvenes no estudian ni trabajan y en su gran mayoría viven en zonas marginales, muchas de ellas dominadas por el narco tráfico y el crimen organizado, en donde la violencia es parte de su cotidianidad.

Como es igualmente cierto que ciudadanos y consumidores han sido víctimas de abusos reiterados por parte del mercado. Ha conocido de malas prácticas políticas y hechos de corrupción que comprometen a las FF.AA., las fuerzas policiales y diversas instituciones del Estado. Todo ello sumado a deficientes servicios públicos y baja calidad en salud o educación.

Las diversas interpretaciones y lecturas del estallido

No sin buenos argumentos, el [REDACTED] ha sostenido que el estallido social en nuestro país se parece más al estallido social protagonizado por los “indignados” en España o los chalecos amarillos en Francia. Una crisis más propia de un país desarrollado (o en vías de serlo), que no ha logrado acompasar su proceso de desarrollo con activas políticas de inclusión y protección social, que apunten a un Estado de bienestar.

Ello ha venido incubando un difuso pero extendido malestar social en contra de las desigualdades, los abusos del mercado, deficiencias en los servicios públicos y malas prácticas políticas.

Existe una clara disociación entre el mundo político (gobierno, partidos, parlamento) y el movimiento social. Una ruptura de los lazos entre la política y la sociedad. Un proceso de “despolitización” y pérdida de confianza de la ciudadanía hacia sus representantes. Una incapacidad de los actores políticos para construir un relato comprensivo de los procesos políticos y sociales que ha vivido el país.

Para ser rigurosos, ello se arrastra desde los años 80, cuando la derecha insistía en reivindicar el “legado” del régimen militar y perpetuar al general [®] en el poder, en tanto que un sector de la oposición apostaba a una vía insurreccional para derrotar a la dictadura, mientras que otro sector (mayoritario) apostaba a una salida política, materializada en la opción por el NO al continuismo.

Chile no constituyó el caso típico de una transición pactada. Tanto Pinochet como la derecha estaban convencidos que podía ganar el plebiscito y lograr extender el mandato del dictador por otros ocho años y la oposición, con la tardía incorporación de sectores de la izquierda, debieron esforzarse en ganar el plebiscito, con condiciones muy adversas, para luego tener que pactar con las fuerzas armadas y la derecha, las condiciones de la transición a la democracia. Condiciones que, con los ojos del presente, aparecen como impresentables (entre otras la mantención de Pinochet como Comandante en Jefe del Ejército, la vigencia de la Constitución de 1980 y sus enclaves autoritarios, el blanqueo de las privatizaciones de las empresas públicas, etc.).

Puesto en la disyuntiva de optar por una “coalición chica”, que incluyera a la DC, el Partido Radical y sectores de la derecha democrática (que apoyaron la opción por el NO en el plebiscito de 1988) o una coalición ampliada, que incluyera a sectores de la izquierda que se jugaron por la salida política, Patricio Aylwin optó por esta última alternativa.

En esa coalición no fue incluido el PC y otras fuerzas de izquierda que por largo tiempo fueron marginalizadas por el sistema binominal y militaron en la oposición a los gobiernos concertacionistas. Fue tan sólo en el segundo gobierno de Michelle Bachelet cuando la Concertación de Partidos por la Democracia debió ceder su lugar a la Nueva Mayoría, incluido el Partido Comunista, no sin resistencia de la Democracia Cristiana, que asumió a dicho conglomerado como un acuerdo político y programático y no como una nueva coalición política.

Todas estas disquisiciones apuntan a explicar las diferencias que aún subsisten en la oposición a la hora de interpretar el actual estallido social que vive el país, sus verdaderas razones y la forma de enfrentarlo.

Mientras amplios sectores de la oposición, asumiendo las limitaciones,, errores e deficiencias del proceso político, económico y social de estos últimos treinta años (sin demasiado énfasis en los éxitos y avances), se esfuerzan por abrir un cauce institucional que permita procesar las principales demandas ciudadanas, otros sectores

(no tan sólo el PC) parecen pensar que todos los abusos y desigualdades que se han acumulado en el país en estos años tienen su origen en la forma que asumiera la transición y una supuesta falta de voluntad de quienes lideraron el proceso de transición y consolidación democrática para transformar el orden vigente. Y no pocos asumen que el país se encuentra en un momento pre revolucionario.

Un gobierno confundido, debilitado, sin diseño. Y una coalición dividida

Sin lugar a dudas, el actual gobierno y un sector mayoritario de la derecha tienden a compartir la idea de una conspiración internacional, con el concurso de la izquierda y sus aliados, que busca desestabilizar al gobierno y recuperar el poder. Como parte de una visión conspirativa de las verdaderas razones que explican no tan sólo el estallido social sino principalmente los graves hechos de violencia que los han acompañado, tienden a reducir el problema a un tema de orden y seguridad antes que a las dimensiones propiamente políticas, sociales y culturales del conflicto.

A más de dos meses de haber estallado el conflicto, el gobierno no tiene un diseño político que permita enfrentar la crisis. Nos encontramos con un gobierno confundido y debilitado y una coalición oficialista dividida entre aquellos que demandan mano dura y la defensa del modelo y sectores que asumen la necesidad del cambio y rectificaciones.

El propio ajuste ministerial al cual se vio forzado el gobierno implicó el alejamiento de figuras con peso político importante, como el ministro Chadwick, siendo reemplazados por ministros de menor tonelaje político, como el ministro Blumel y Briones, que militan en el partido menos relevante de la coalición oficialista. Tampoco Felipe Ward es una figura muy relevante en la UDI. Ese menor peso político del gabinete contribuye poderosamente al desorden que muestra el oficialismo.

Las diferencias en torno a la paridad de género para elegir a los integrantes de la Convención que deberá redactar la futura Constitución fue apenas una señal de las profundas diferencias que cruzan a la derecha, que mayoritariamente no quieren una nueva Constitución ni mucho menos rectificaciones estructurales al modelo de desarrollo.

Asumiendo que el programa de gobierno que ofreciera al país hoy carece de toda viabilidad, el Ejecutivo busca “actualizarlo”, proponiendo tímidas reformas del todo insuficientes, (el máximo del mínimo o maximin), que no van al fondo de las demandas sociales expresadas en masivas movilizaciones sociales.

Sin lugar a dudas, con las fiestas de fin de año y las vacaciones de verano, tanto las movilizaciones sociales como los hechos de violencia han tendido a decrecer y amainar en estos últimos días (no a detenerse).

Pero es más que evidente que podrían cobrar renovados bríos con el reinicio del año político en el próximo mes de marzo, si el gobierno no expresa una real voluntad de rectificaciones muy de fondo para dar adecuadas respuestas a las principales demandas ciudadanas, que no tan sólo incluyen una nueva constitución redactada en democracia a través de una Convención mixta o íntegramente elegida, sino también un nuevo pacto social y tributario, que incluya reformas sustantivas a la salud, educación, pensiones, nuevas regulaciones a los mercados y un sistema integral de protección social.

Una verdadera ruta de reformas y la manera de financiarla

Diversos sectores de oposición, desde la DC hasta el Frente Amplio, agrupados en el Foro económico, que reúne no tan sólo economistas sino también académicos y dirigentes políticos, han propuesto una agenda de reformas sociales de gran envergadura, con medidas de corto, mediano y largo plazo, así como fórmulas de financiamiento de este verdadero nuevo pacto social, que necesariamente debiera incluir una profunda reforma del sistema previsional, una reforma integral de la salud y educación, una sustantiva agenda en contra de los abusos y en contra de las desigualdades, además de una activa política de reactivación económica, inclusión social y re equilibrios sociales en el país.

En un reciente seminario organizado por senadores de oposición, que contó con la participación del ministro de Hacienda y destacados economistas de oposición (Roberto Zalher, Nicolás Eyzaguirre y Oscar Landerretche) los expositores detallaron la propuesta para el financiamiento de una agenda de cambios como la insinuada.

Los integrantes de este Foro económico han desplegado un esfuerzo de diálogo con dirigentes sociales, incluida la Mesa de Unidad Social, además de dirigentes empresariales, buscando generar consensos en torno a una robusta agenda social que entregue respuestas a las principales demandas ciudadanas y que debiera incluir una activa participación del parlamento.

Dirigentes empresariales, asumiendo la profundidad de la crisis social que vive el país han afirmado que ha llegado la hora de meterse la mano al bolsillo “hasta que duela” y parece haber llegado la hora de que honren ese compromiso.

De igual manera sería muy relevante que los partidos de oposición, en diálogo con los representantes de las principales organizaciones sociales, asumieran la propuesta y emplazaran al gobierno a un acuerdo en torno a sus contenidos.

La reunión convocada por la Mesa de Unidad Social con representante de los partidos de oposición “para abordar los eventuales escenarios que se avecinan, como el

plebiscito de entrada del proceso constituyente y la agenda social” puede contribuir a superar diferencias y construir un amplio frente social y político en torno a las principales demandas ciudadanas.

En verdad, los tiempos son exigentes y el gobierno parece escasamente receptivo a propuestas de reformas estructurales que van a contramano de sus convicciones más profundas. Pero los riesgos de intentar negociar a cuenta gotas, ofreciendo condiciones de mínimos para intentar salvar lo máximo, son muy serios.

FUNDACIÓN FELIPE HERRERA
PDTE. JUAN ANTONIO RÍOS N° 58 – PISO 3 (26 33 99 79)